

Santiago, veinte de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1º.- Que en este procedimiento ordinario seguido ante el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol 22728-2016, caratulado “Seminarium Internacional SpA/ Banco Santander Chile”, la demandante recurre de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, que rechazó el recurso de casación en la forma y confirmó el fallo de primer grado de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por medio del cual se rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual, con costas.

2º.- Que el recurrente acusa infracción a los artículos 1545, 1547 y 1698 del Código Civil.

Argumenta -en síntesis- que los sentenciadores incurrieron en vulneración a las leyes reguladoras de la prueba; al efecto menciona que, en atención a que la demanda se sustenta en el régimen de responsabilidad contractual, correspondía a su parte acreditar la existencia de los contratos, los derechos y obligaciones que gravan a los contratantes, así como de los daños se solicitan sean resarcidos; en tanto que, el demandado debía probar el cumplimiento de las obligaciones que el contrato le imponía.

Señala que, no obstante lo expuesto en el párrafo anterior, la sentencia de segunda instancia, en su motivo 15º estableció que: “La prueba rendida por la actora no resulta concluyente para determinar que haya existido una inacción por parte del ejecutivo bancario empleado de la demandada, sino una falta de cuidado en las actoras en orden al resguardo de la información sensible de sus cuentas bancarias”; añade que, de igual forma, sancionó que las demandantes no acreditaron de modo alguno que las claves bancarias hubieren sido entregadas por el Banco al señor Cristián Gallegos Méndez –al



momento de las transacciones cuestionadas, empleado de la actora- y en consecuencia, si aquel hizo mal uso de ellas, fue permitido por las propias sociedades, con lo cual -estima- se invirtió el peso de la prueba en perjuicio de su parte.

Sostiene que, contrariamente a lo resuelto por el tribunal, la demandada debía probar haber otorgado las claves y productos a quien se encontraba facultada para realizar las transferencias; en consecuencia, solicita invalidar la sentencia recurrida y dictar una de reemplazo en que se acoja la demanda.

3º.- Que la sentencia de primer grado -cuyas consideraciones son compartidas en alzada- determinó que la relación contractual existente entre las partes no fue objeto de controversia, así como tampoco los derechos y obligaciones que la vinculación les imponía. Seguidamente indica que el primer reproche del demandante, refiere a la transferencia de USD \$50.000 efectuada desde la cuenta Seminarium Internacional SpA a la cuenta de la Sociedad Seminarium Training SpA, determinando en su considerando décimo cuarto que tal operación fue solicitada por el representante legal de las sociedades demandantes y que, en consecuencia, no corresponde a una apropiación indebida de Gallegos Méndez.

Por otro lado, expone que se objetan determinadas transferencias en moneda nacional realizadas desde cuentas corrientes corporativas de las sociedades demandantes, las cuales habrían sido realizadas por Gallegos Méndez usando las denominadas “claves dinámicas”, las que –a su vez- habrían sido entregadas indebidamente por el Banco. Para decidir sobre la efectividad de la imputación que se analiza, trae a colación el tenor del informe pericial evacuado en la causa, describiendo pormenorizadamente el proceso mediante cual se llevan a cabo las transferencias bancarias, concluyendo que el Banco demandado adopta todos los resguardos para que



las transferencias las puede realizar solo quienes cuenten o administren los dispositivos de seguridad, descartando que tales instrumentos hubieren sido entregados indebidamente por el demandado al aludido funcionario. En este mismo sentido, la sentencia de segundo grado indica que en los contratos celebrados por las partes, se establece que las claves secretas son personales e intransferibles, siendo de exclusiva responsabilidad del cliente su divulgación a terceros; asentando que existe -por tanto- un deber de resguardo de los demandantes en cuanto al manejo de las claves y las designaciones de sus apoderados ante el Banco.

Con el mérito de lo expuesto, los sentenciadores advierten sobre la ausencia de control en las distintas empresas del holding, en relación a los movimientos bancarios, sancionando que los demandantes no pueden pretender endosar su falta de diligencia o cuidado en la contra parte del contrato; así, desechan la existencia de un incumplimiento por parte de la demandada, procediendo al rechazo de la demanda.

4º.- Que sobre la base de los hechos antes reseñados queda en evidencia que las alegaciones del impugnante persiguen desvirtuar los supuestos fácticos fundamentales asentados por los sentenciadores, en el caso, aquellos en los que se hizo radicar el incumplimiento del demandado, esto es, que el Banco demandado se apartó de los procedimientos previamente establecidos para llevar a cabo las operaciones bancarias objetadas. Sin embargo, la determinación de los hechos de la causa compete a los jueces del fondo, y efectuada correctamente dicha labor en atención a las probanzas aportadas, resultan inamovibles conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, no siendo posible su revisión por la vía de la nulidad que se analiza al no haberse denunciado contravención a las leyes reguladoras de la prueba que han permitido establecer el supuesto fáctico que viene asentado en el fallo.



De conformidad a lo razonado precedentemente, se ha de tener presente que en nada altera lo resuelto, la denuncia de conculcación a lo dispuesto en los artículos 1698 del código sustantivo, por cuanto aquella corresponde a una regla general de nuestro derecho positivo relacionada con la distribución de la carga probatoria, misma que no se aprecia infringida en autos, desde que los sentenciadores no gravaron al recurrente con prueba de hechos que no correspondiese a su parte.

5°.- Que en mérito de lo expuesto el recurso de casación en el fondo no podrá prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Samuel Buzeta Plaza, en representación de la parte demandante, contra la sentencia de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase vía interconexión.

Rol N° 26.034-2023





Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., María Angélica Cecilia Repetto G., María Soledad Melo L. y Abogada Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, veinte de julio de dos mil veintitrés.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veinte de julio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

